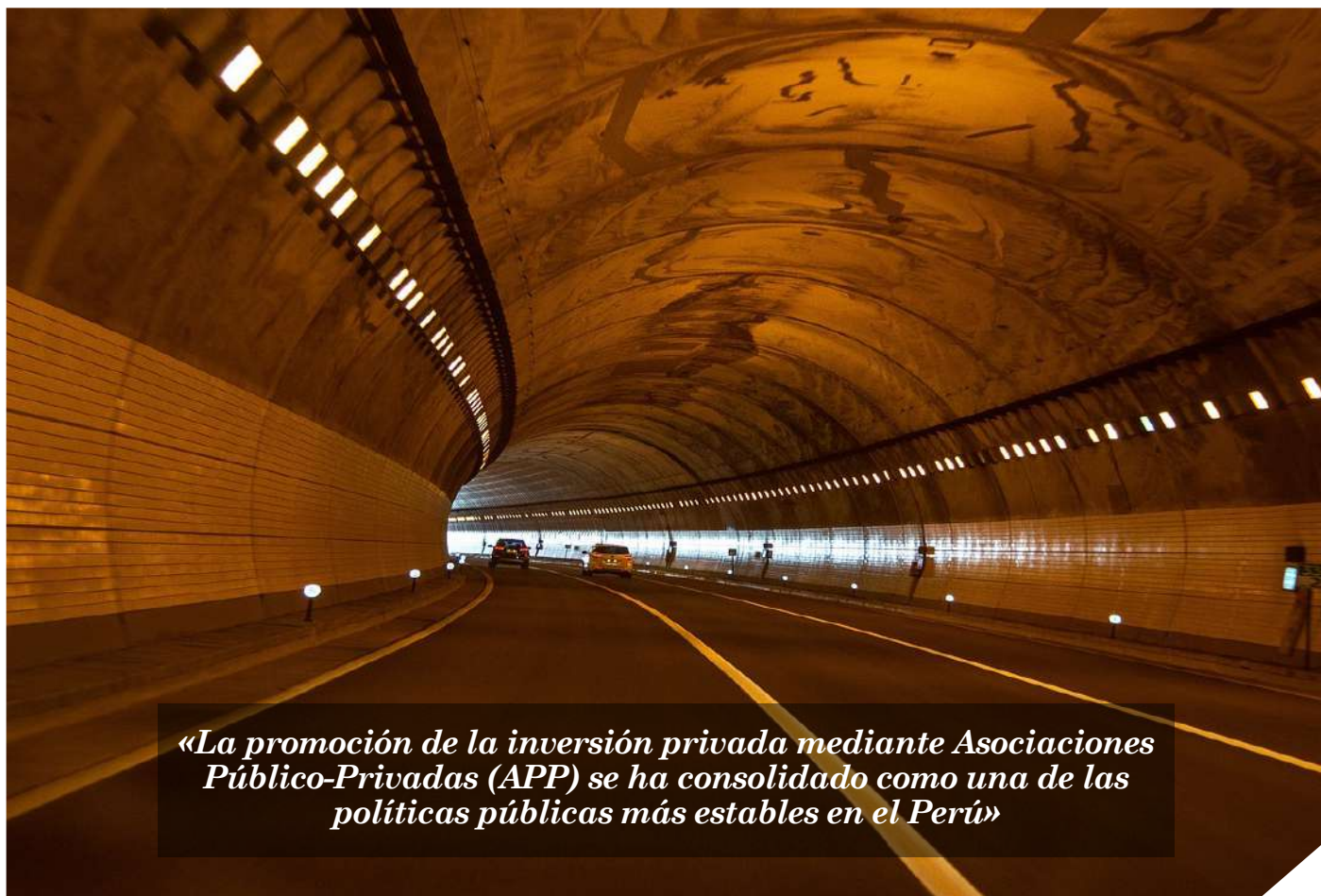




«La promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) se ha consolidado como una de las políticas públicas más estables en el Perú»

EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

La nueva ley de APP: ¿un cambio de rumbo para la inversión en infraestructura en el Perú?

The New PPP Law: A Transformative Shift for Infrastructure Investment in Peru?

Definición del concepto de “servicio digital”: giro hacia la seguridad jurídica

Defining “Digital Services”: A Shift Towards Legal Certainty

La inteligencia artificial y la justicia laboral en el Perú: ¿avance o amenaza para la tutela jurisdiccional efectiva de derechos?

Artificial intelligence and labor justice in Peru: is it progress or a threat to the effective judicial protection of rights?

El espejismo del *negative leakage* en los mecanismos *lock-box*

The mirage of negative leakage in lock-box mechanisms



Importancia de la utilización de medios de pago del sistema financiero en la compraventa internacional de mercancías

6 FREDI RAMÍREZ VALDEZ
Asociado, experto en comercio exterior



Servidumbres de paso

11 JORGE CARCELÉN MARTÍNEZ
Socio, experto en derecho corporativo – Sede Ica



La nueva ley de APP: ¿un cambio de rumbo para la inversión en infraestructura en el Perú?

14 DAYANA CUBA GALLARDO
Asociada, experta en infraestructura, APP y OXI



COMENTARIO TRIBUTARIO

Definición del concepto de “servicio digital”: giro hacia la seguridad jurídica

18 CÉSAR CASTILLO DEL ÁGUILA
Asociado senior, experto en derecho tributario



COMENTARIO LABORAL

La inteligencia artificial y la justicia laboral en el Perú: ¿avance o amenaza para la tutela jurisdiccional efectiva de derechos?

20 DANIEL ROMERO ZULOAGA
Asociado, experto en derecho laboral y seguridad social



Procesos judiciales contra el Estado peruano

22 ALEJANDRA BALLÓN GODOY
Asociada, experta en el área de litigios



Los contratos menores en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas

25 ANA CRISTINA RIVERA ALARCÓN
Asociada, experta en procesos de selección



DESDE EL CONGRESO

- * Proyecto que prohíbe el uso de celulares y medios digitales por parte de los trabajadores de atención directa al usuario en entidades financieras y bancos.
- * Proyecto que modifica el artículo 2 de la Ley n.º 25129 para extender la asignación familiar, sin límite de edad, a trabajadores con hijos con discapacidad severa.

28



EL EXPERTO

El espejismo del *negative leakage* en los mecanismos *lock-box*

30 RAÚL VIZCARRA CASTILLO
Socio, experto en derecho corporativo



ALERTA MÁXIMA

Autorizan la expedición del pasaporte oficial y del pasaporte de emergencia

33



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- * Desayuno ejecutivo
- * Leaders League Compliance Summit Latam
- * Chambers Insurance Litigation Global Practice Guide 2025

35



COLUMNS
— REVISTA LEGAL —
NÚMERO 222

ESTUDIO MUÑOZ
MUÑOZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Emely Mattos

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñoz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

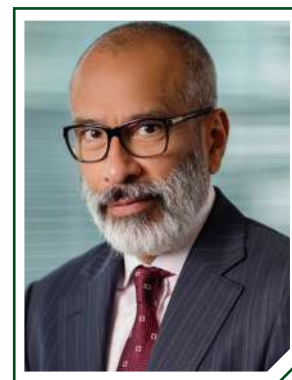
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2007-07703

OPENSAC
IDEAS & SOLUCIONES

editor.open@gmail.com
T- (51) 993416556

«Durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los mantenga en respeto, se hallan en la condición que se llama guerra... y tal guerra es la de cada hombre contra cada hombre»

Thomas Hobbes, *Leviatán*



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

«...Un fracaso más que importa...»¹

En un nuevo «esfuerzo» para contener la crisis de inseguridad que azota al país, el Ejecutivo (ahora con Jeri a la cabeza) ha promulgado el Decreto Supremo n.º 140-2025-PCM que, por segunda vez, prorroga por 30 días calendario el estado de emergencia para Lima Metropolitana y el Callao, declarado previamente por Decreto Supremo n.º 124-2025-PCM; medida que, no obstante, es repetitiva y manifiestamente ineficaz.

De forma tal que declarar el estado de emergencia (EE) parece haberse convertido en la única «solución», una suerte de «lugar común» o «cajón de sastre», en el que las autoridades a cargo del Ejecutivo piensan y de la que echan mano para aplacar la inseguridad ciudadana, pese a que, objetivamente está demostrado que tal medida no ha servido para absolutamente nada.² Y a contracorriente de lo que se pretende, su reiterado empleo constituye en la práctica una confesión de parte sobre la ineptitud del sistema para enfrentar la criminalidad; «mensaje» muy peligroso para los delincuentes que actúan a sus anchas frente a tal penosa y alarmante circunstancia (no tengo más armas legales con que combatirte). Más o menos como la del establecimiento comercial aquel que para espantar a los potenciales ladrones hacia uso de su letrero o cartel: «cuidado con el perro», especie canina que por cierto solo existía en la imaginación del propietario.

Lo anterior es grave debido a que el Estado/Gobierno se ve sobrepasado por la criminalidad, la que no solo no ha disminuido, sino que paradójicamente, se ha incrementado. Estudios³ revelan que en el periodo 2023-2025 se registraron 5707 asesinatos, número significativamente mayor a los 3973 de los años precedentes (2020-2022). Y en lo que va del 2025 se han consumado 2113 homicidios.

Resulta entonces que la declaración del EE constituye un ejercicio de autoengaño más que una solución real para enfrentar eficazmente el problema que nos agobia. Algunos analistas sugieren que la raíz del problema es la mala ejecución de la medida, lo que de paso pone en duda la efectividad de las Fuerzas Armadas para restituir el orden. En nuestra opinión, el mayor error reside en el uso indebido e indiscriminado de un mecanismo constitucional que, según el artículo 137 de la Constitución, está reservado para situaciones excepcionales, que comprometen la vida de la nación. La inseguridad ciudadana representa un problema crítico, pero no es un evento extraordinario; es en realidad una constante en el país, que amerita ser abordada de forma estructural y no mediante declaraciones de emergencia. Por ejemplo, una reorganización absoluta de la policía nacional y el sistema de justicia penal, pero no promulgando más leyes o inventando nuevos tipos penales (terrorismo urbano o de imagen), sino aplicando drásticamente la normativa legal existente.

Este uso indiscriminado y erróneo del mecanismo extraordinario, amén de socavar la institucionalidad democrática (se restringen libertades fundamentales, tales como la de reunión, tránsito, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal); nos impone la insana circunstancia de vivir con el orden constitucional alterado y en una sensación permanente de crisis, como si eso fuera algo normal. En suma, para el Ejecutivo, quien quiera sea que este al frente de este, la excepción se ha convertido en lo permanente u ordinario.

Esperemos que, de cara a las próximas elecciones, los candidatos presidenciales comprendan que es momento de abandonar la fórmula del EE, demostradamente inútil, y opten por propuestas que restablezcan el orden, sin

¹ La frase pertenece al estribillo del vals titulado "Que importa" interpretado por la cantante Lucha Reyes

² Del 2021 al 2025 el Poder Ejecutivo emitió alrededor de 560 decretos asociados al estado de emergencia. (Fuentes: "La normalización de la excepción: Estados de Emergencia en el Perú (2000-2024)" por Cruz et al.; y "Decretos de Estados de excepción" en Archivo Digital del Congreso de la República (<https://www.congreso.gob.pe/control-politico/decretos-supremos/>)).

³ Fuente: Ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, cuyos estudios están basados en registros del SINADEF (Sistema de información de Defunciones).



sacrificar la democracia y el estado constitucional. De lo contrario, estaremos condenados a seguir esperando, inertes, el avance de la criminalidad. Y la incomprensible incompetencia de las autoridades que nos gobiernan.

Mientras lo anterior acontece, el Congreso de la República, fiel a su estilo y empeñado en seguir socavando su exigua popularidad ha incrementado su presupuesto de forma exponencial. Y establecido este para el 2026 en S/ 1'768 millones, el doble del 2022 y cuatro veces más que el 2007⁴; demostrando así, una vez más, de que lo último que le preocupa es el bien común en general y la seguridad de los ciudadanos, en particular.

Finalmente, el presidente circunstancialmente en funciones, Jeri, parece creer que, por declarar mucho a los medios, remangarse la camisa, visitar inopinadamente comisarias y presenciar requisas en los penales (imitando así y mal a otros gobernantes de la región) parte del asunto ya está

solucionado; pues no, no lo está. Y quizás alguien deba decirle que su «luna de miel» y el tiempo se le terminará pronto; decirle también que nada conseguirá otorgando entrevistas (sobre temas absolutamente banales e intrascendentes) o viajando de aquí para allá (a ninguna parte). Ojalá más bien «aterrice» pronto, pues a contracorriente del rotulo: un fracaso más sí debería importarle... »

⁴ Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (<https://www.congreso.gob.pe/DIDP/presupuesto-2026/exposiciones/>).

«The concept resonates with Thomas Hobbes's observation in "Leviathan": During the time that men live without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called war; and such a war is of every man against every man» **Thomas Hobbes, Leviathan.**

“...Another failure, who cares...”¹

In a renewed “effort” to contain the insecurity crisis plaguing the country, the Executive, now led by Jeri, has enacted Supreme Decree No. 140-2025-PCM. This decree extends the state of emergency for Metropolitan Lima and Callao for an additional 30 calendar days, following its initial declaration in Supreme Decree No. 124-2025-PCM. However, this measure appears to be redundant and largely ineffective in achieving its intended goals.

Declaring a state of emergency (SoE) seems to have become the only «solution» a sort of «commonplace» or «catch-all» that the those in charge of the Executive Branch rely on to address citizen insecurity, even though such measure has objectively demonstrated to be utterly ineffective.² And contrary to what is intended, resorting repeatedly to this measure constitutes in practice a signal of the system's inability to fight against crime. This is a clear “message” to criminals, who already feel complacent and will become even more emboldened in the face of such distressing and alarming admission (I have no other legal weapons to fight against you). It is like a shop owner using a “Beware of the Dog” sign with a fake dog or no dog at all to deter thieves.

This is a critical situation because the State/Government is overwhelmed by crime, which far from decreasing, has escalated even more, paradoxically. Studies³ show that there will be 5707 murders between 2023-2025, significantly higher than the 3973 in the preceding years (2020-2022). So far in 2025, 2113 homicides have been committed.

In this context, declaring SoEs end up being an exercise in self-deception rather than a real solution to effectively address this overwhelming problem. Some analysts suggest that the root of the problem is the poor implementation of this measure, which incidentally casts doubt on the effectiveness of the Armed Forces in restoring order. In our opinion, the greatest error lies in improperly and indiscriminately using a constitutional mechanism that is reserved for exceptional circumstances that severely threaten the life of the nation (Article 137 of the Constitution). Citizen insecurity is a severe problem, but it is not an exceptional event; it is in fact a chronic issue in the country requiring structural solutions-not emergency declarations. For example, a comprehensive overhaul of the national police and

the criminal justice system is required, involving strict, consistent enforcement of existing laws rather than legislative expansion or creating new crimes (urban or image terrorism).

The indiscriminate and wrong use of this exceptional mechanism undermines the democratic institutional framework (i.e. fundamental freedoms, such as freedom of assembly, transit across the national territory, inviolability of homes, and personal security), while imposing on people an unhealthy practice of living under an altered constitutional order and a perpetual sense of crisis, as if this were something normal. In short, for the Executive, irrespective of who is in office, exceptions have become the standard or permanent way to address this crisis.

Let us hope that, in the upcoming presidential elections, candidates understand that it is time to abandon the use of SoE, which has proven to be useless, and instead opt for proposals that restore order, without sacrificing democracy and the constitutional order. Otherwise, we will be doomed to continue watching-inert-the escalation of crime; while the ruling authorities remain incomprehensibly incompetent to address this situation.

While this is happening, the Congress of Peru-faithful to its style and determined to continue undermining its meager popularity-has increased its budget exponentially. Indeed, its budget for 2026 is set at PEN 1.768 billion, double that of 2022 and four times more than that of 2007⁴; thus demonstrating, once again, that the last thing that concerns them is the common good, in general, and the citizen security, in particular.

Finally, the accidental acting president, Jeri, seems to believe that, by making numerous statements to the media, rolling up his sleeves, paying surprise visits to police stations, and observing searches in prisons (thus poorly imitating other leaders in the region), part of the problem has already been solved. But, no, it has not. Perhaps someone should tell him that his “honeymoon” and time in office will soon be over; also tell him that he will achieve nothing by giving interviews (on absolutely banal and inconsequential topics) or traveling back and forth (to nowhere). Hopefully, he will “come down to earth” soon, because-contrary to the heading-one more failure should care to him... »

¹ This phrase is drawn from the chorus of the waltz “Que importa” (“Who Cares”) performed by singer Lucha Reyes.

² From 2021 to 2025, the Executive Branch issued approximately 560 decrees related to states of emergency. (Sources: “The Normalization of the Exception: States of Emergency in Peru (2000–2024)” by Cruz et al.; and “Decrees on States of Exception” in the Digital Archive of the Congress of the Republic) (<https://www.congreso.gob.pe/control-politico/decretos-supremos/>).

³ Source: Engineer and data analyst, Juan Carbajal, whose studies are based on SINADEF (Death Information System) records.

⁴ Source: Ministry of Economy and Finance (<https://www.congreso.gob.pe/DIDP/presupuesto-2026/exposiciones/>).



IMPORTANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

En los últimos años ha cobrado especial relevancia para la Sunat y los importadores la materia asociada a la utilización de medios de pago del sistema financiero para efectos del pago de mercancías importadas que fueron materia de compraventa internacional, siendo que la inobservancia de dicha obligación puede implicar la configuración de una infracción con sanción de multa equivalente al 30 % del valor FOB de la mercancía declarada, e inclusive consecuencias negativas de carácter tributario.

Al respecto, la obligación de utilización de medios de pago del sistema financiero para efectos de mercancías adquiridas bajo una compraventa internacional se encuentra regulada bajo la Ley n.º 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, así como en su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo n.º 150-2007-EF (en adelante, TUO de la Ley n.º 28194). En ese sentido, mediante dicha normativa se establece de forma imperativa la utilización de los medios de pago a través de empresas del sistema financiero, a fin de evitar la evasión tributaria y contribuir a la formalización de la economía.

Del análisis de dicho marco normativo, cobra especial relevancia el artículo 3-A del TUO de la Ley n.º 28194, del cual pueden extraerse las siguientes conclusiones relevantes:

- Se establece que la compraventa internacional de mercancías



FREDI RAMÍREZ VALDEZ

Asociado, experto en comercio exterior
Associate, expert in foreign trade
 framirezv@munizlaw.com

La obligación de utilización de medios de pago del sistema financiero para efectos de mercancías adquiridas bajo una compraventa internacional se encuentra regulada bajo la Ley n.º 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, así como en su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo n.º 150-2007-EF (en adelante, TUO de la Ley n.º 28194).

que se destinan al régimen aduanero de importación para el consumo, cuyo valor FOB sea superior a los S/. 7,000.00 o US\$ 2,000.00, se debe pagar empleándose uno de los medios de pago del sistema financiero dispuestos en el artículo 5º del TUO de la Ley n.º 28194, tales como depósitos en cuenta, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito expedidas en el país, tarjetas de crédito expedidas, cheques, remesas y cartas de crédito.

Asimismo, la norma bajo comentario resulta aplicable en tanto, en el marco de la compraventa internacional, se efectúe una contraprestación en dinero por parte del comprador frente a su proveedor para efectos del pago de la mercancía; siendo que, de no existir un pago en suma de dinero —como por ejemplo bajo una compensación— no resultará aplicable la obligación de utilizar medios de pago del sistema financiero.

Complementariamente, es importante resaltar que, bajo lo dispuesto en el artículo 5-A del TUO de la Ley n.º 28194, se establece expresamente que el uso de medios de pago se tiene por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien y/o prestador del servicio, y que, cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, se considerará cumplida dicha obligación siempre que tal designación se comunique a la Sunat con anterioridad al pago, en la forma y condiciones que esta señale mediante resolución de superintendencia. Cabe indicar que la Sunat todavía no ha emitido una resolución que regule la formalidad de comunicación del pago a un tercero; no obstante, conservadoramente, las compañías que se encuentren bajo dicha situación deben proceder a realizar oportunamente comunicación ante la Sunat, siempre con anterioridad al pago, vía Mesa de Partes Virtual de la Sunat.

- Asimismo, ante el incumplimiento de la obligación de utilización de medios de pago del sistema financiero en la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación, el artículo 3-A del TUO de la Ley n.º 28194 establece las siguientes situaciones negativas para el importador:

- **Situación 1: en caso se evidencie la no utilización de los medios de pago del sistema financiero en el marco de despacho de importación y con anterioridad al levante autorizado**

El importador pueda optar por las siguientes alternativas: (i) proceder al reembarque de la mercancía, lo que implica retomar al exterior la mercancía, y no materialización de la importación, o (ii) continuar el despacho de importación de la mercancía previo pago de la multa por el importador equivalente al 30% del valor FOB declarado de la mercancía, por la configuración de la infracción prevista bajo el Código P52 de la Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Supremo n.º 418-2019-EF.

- **Situación 2: En caso se evidencie la no utilización de los medios de pago con posterioridad al levante autorizado**

Se aplicará al importador la sanción equivalente al 30% del



valor FOB declarado de la mercancía por la configuración de la infracción bajo Código P52.

A lo anterior, debe agregarse el hecho que, tanto bajo la situación 1, en caso se opte por el pago de la multa, y la situación 2 previamente descritas, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 8° del TUO de la Ley N° 28194, norma que taxativamente establece que, para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar medios de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios.

Es bajo lo expuesto que, desde este foro remarcamos la importancia de dar cumplimiento correcto a la normativa en materia de medios de pago del sistema financiero por parte de los importadores, siendo este un elemento relevante no solo en materia de medios de pago, sino también importante para la materia asociada a la valoración aduanera, debiéndose procurar siempre que exista una relación y/o vinculación entre el documento bancario que soporta el medio de pago y la compraventa internacional.)))

Es importante resaltar que, bajo lo dispuesto en el artículo 5-A del TUO de la Ley n.º 28194, se establece expresamente que el uso de medios de pago se tiene por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien y/o prestador del servicio, y que, cuando dicho pago se realice a un tercero designado por aquel, se considerará cumplida dicha obligación siempre que tal designación se comunique a la Sunat con anterioridad al pago, en la forma y condiciones que esta señale mediante resolución de superintendencia.

Importance of using payment methods available in the financial system in international trade of goods

In recent years, the use of financial system payment methods to pay for imported goods-particularly those involved in international sales-has become increasingly significant for the Peruvian Tax Administration (SUNAT) and importers. Non-compliance with this requirement may result in an infringement, carrying a fine amounting to 30% of the FOB value of the declared goods, alongside potential adverse tax repercussions.

In this regard, the obligation to use payment methods in the financial system for purposes of goods acquired under an international sale and purchase is regulated under Law No. 28194, Law for the Fight against Evasion and for the Formalization of the Economy, as well as in its Sole Ordered Text approved by Supreme Decree No. 150-2007-EF (hereinafter, TUO of Law No. 28194). In this context, the use of payment methods through financial system entities is crucial to prevent tax evasion and promote formalization of the economy.

An analysis of the regulatory framework reveals that Article 3-A of the Single Amended Text (TUO) of Law No. 28194 is particularly significant, leading to the following key conclusions:

- international sale and purchase of goods intended for the customs regime of import for consumption, with FOB value exceeding S/. 7,000.00 or US\$ 2,000.00, must be conducted using one of the financial system payment methods specified in Article 5 of the TUO of Law No. 28194. These acceptable payment methods include account deposits, drafts, fund transfers, money orders, domestic debit cards, issued credit cards, checks, remittances, and letters of credit.

Furthermore, the aforementioned rule applies as long as the buyer makes a monetary payment to the supplier for the goods within the context of an international sale and purchase. If payment is not made in cash-such as in cases of compensation-the requirement to use financial system payment methods does not apply.

In addition, it is important to highlight that, according to Article 5-A of the TUO of Law No. 28194, compliance with the payment method requirement is only recognized when the payment is made directly to the creditor, the supplier of the goods and/or services. When such payment is made to a third party designated by the creditor, the obligation is deemed fulfilled only if this designation is communicated to SUNAT prior to the payment, following the procedures and conditions established by a superintendent's resolution. It is important to note that SUNAT has not yet issued a resolution outlining the process for notifying payment to a third party; however, companies in this situation should proactively inform SUNAT of such payments, ideally before executing them, through the SUNAT's Virtual Desk.

- Moreover, in the event of non-compliance with the obligation to use the financial system payment methods in international sales and purchases of goods intended for the import regime, Article 3-A of the TUO of Law No. 28194 establishes the following negative consequences for the importer:

- **Situation 1: Non-use of Financial System Payment methods in Import Clearance and Prior Authorized Release.**

In the event that an importer does not utilize the designated payment methods within the financial system during import clearance and prior to authorized release, the importer has the following alternatives: (i) Reshipment of Goods: The importer may choose to return the goods to the country of origin, thereby not completing the import process. (ii) Continue Import Clearance: The importer may proceed with the import clearance, contingent upon the payment of a fine. This fine is set at 30% of the declared FOB value of the goods, as stipulated for this infringement under Code P52 in the Table of Penalties established by the General Customs Law, as approved by Supreme Decree No. 418-2019-EF.

- **Situation 2: Non-use of Payment Methods after the Authorized Release of Goods**

If evidence emerges regarding the non-use of designated payment methods following the authorized release of goods, the importer will incur a penalty equal to 30% of the declared FOB value of the merchandise based on the infringement classified under Code P52.

Moreover, it is essential to note that the provisions outlined in Article 8 of the TUO of Law No. 28194 apply to both Situation 1 (where the fine payment option is chosen) and the current situation 2. This rule specifies that, for tax purposes, any payments made without the use of recognized payment methods will not qualify for deductions of expenses, costs or credits, nor will they allow for compensations or requests for tax refunds, credit balances, tax reimbursements, early recovery, restoration of customs duties.

In view of these implications, this forum stresses the importance of ensuring importers comply with the regulations governing financial system payment methods. Adhering to these regulations is not only fundamental to proper payment practices but also vital for customs valuation processes, ensuring a clear connection between the banking documentation supporting the payment means and the international sale and purchase transactions. »



SERVIDUMBRES DE PASO

Es común apreciar dentro de zonas agrícolas la existencia de caminos que conectan a lo largo del mismo a las áreas agrícolas (fundos) que se encuentran dentro de su recorrido, pudiéndose deducir –a simple vista– que se trataría de un camino público para el acceso de dichos predios, empero, muchas veces no es así, porque el área (predio) donde se ubica el camino corresponde a propiedad privada, y por lo tanto, para usarla se tiene que contar con autorización de su propietario y pactar el pago por su uso.

Nuestro Código Civil, en el artículo 1035, señala que: “La ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro, que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente (...)”, pudiendo ser ello una servidumbre de paso. Debiendo entenderse como predio dominante aquel que es beneficiado con la servidumbre y al predio sirviente sobre el cual recae el paso de la servidumbre.

El plazo es establecido por las partes en el acto constitutivo, así como si será onerosa o gratuita. De no establecerse un plazo se consideran perpetuas, siendo inseparables de ambos predios y solo pueden transmitirse con los mismos, subsistiendo cualquiera sea su propietario.

Empero, también existe la servidumbre legal de paso, citada por el artículo 1051 del Código acotado, que precisa: “La servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan salida a los caminos públicos. Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le dé salida o cuando se abre un camino que dé acceso inmediato a dicho predio”; es decir, con lo argüido en este artículo, tenemos que existe también

la servidumbre que se genera legalmente cuando un predio no tenga salida a un camino público y, necesariamente para acceder a este, tenga que utilizar como pase el área de un predio privado.

En tal sentido, como se puede advertir, tenemos que una servidumbre de paso puede ser constituida de mutuo acuerdo entre el propietario del predio sirviente y el del predio dominante, y también puede ser demandada legalmente por el propietario del predio dominante al propietario del predio sirviente, siempre cuando sea esta la única manera de tener acceso a un camino público. Teniendo en este último supuesto que recurrir a un proceso judicial para que, mediante sentencia, un juez ordene la constitución de la referida servidumbre legal de paso, siendo esta servidumbre de todas maneras onerosa (es decir, tendrá que pagarse por su uso).

En mérito a lo esgrimido, es necesario verificar si los caminos –accesos– que no se encuentran dentro del área perimétrica de nuestra propiedad han sido debidamente constituidos por sus propietarios; porque de no ser así estos se encuentran facultados para pedir el pago por su uso y hasta la reivindicación o cierre del camino, por estar conculcándose su derecho de propiedad.

Pero también existen actos para proteger el camino (vía) que se vienen usando o hasta adquirir el derecho de servidumbre, dependiendo del tiempo de uso de este.

Me explico, cuando un camino está a la vista de todos y se verifica su uso constante, a ello se denomina servidumbre aparente, y puede ser, en primer lugar, protegida mediante una acción denominada interdicto de retener, para seguir ejerciendo la posesión sobre la misma, y en segundo lugar, para ya atacar el fondo y adquirir el derecho a la servidumbre mediante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el cual genera, como repito, la adquisición del derecho de usar el área como servidumbre. »



JORGE CARCELÉN MARTÍNEZ

Socio, experto en derecho corporativo – Sede Ica
Partner, expert in corporate law - Ica office
jcarcelen@munizlaw.com

La servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan salida a los caminos públicos. Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le dé salida o cuando se abre un camino que dé acceso inmediato a dicho predio.

Right-of-Way Easement

Within agricultural areas, it is common to find roads that connect different agricultural zones (farms) along their extension. At first sight, one may assume that these roads are public and provide access to those properties. However, this is often not the case, because the land where the road is located belongs to a private owner. Therefore, using the road requires obtaining the owner's authorization and agreeing on payment for its use.

Article 1035 of the Peruvian Civil Code provides that: "The law or the owner of a property may impose encumbrances for the benefit of another, granting the owner of the dominant estate the right to perform certain acts of use over the servient estate (...)", which may constitute a right-of-way. It must be understood that the dominant estate is the property that benefits from the easement, and the servient estate is the property burdened by the easement.

The term is established by the parties in the constitutive act, including whether it will be for valuable consideration or gratuitous. If no term is established, the easement will be considered perpetual. It is inseparable from both estates and may be transferred only with them, remaining in effect regardless of their owner.

However, there is also the legal right-of-way easement, referred to in Article 1051 of the Peruvian Civil Code, which provides: "The legal right-of-way easement is established for the benefit of properties that lack access to public roads. This easement terminates when the owner of the dominant estate purchases another property with access to public roads, or when a road is opened that provides access to the property". This means that, according to this article, there is also a legal easement when a property lacks access to public roads and must use a private property as its access route.

In this regard, as we can see, a right-of-way easement may be constituted by mutual agreement between the owner of the servient estate and the owner of the dominant estate. It may also be legally claimed by the owner of the dominant estate against the owner of the servient estate when this is the only way to obtain access to a public road. In the latter assumption, it is necessary to pursue judicial proceedings so that, by means of a judgment, a judge orders the establishment of the legal right-of-way easement, which in all cases is onerous (i.e., payment must be made for its use).

Based on the foregoing, it is necessary to verify if the roads (access) located outside the perimeter of our property have been duly established by their owners; otherwise, they are entitled to request payment for their use and even to seek recovery or closure of the road, since their property rights are being violated.

There are, however, mechanisms to protect the road that has been in continuous use, and even to acquire the easement right, depending on the time it has been used.

I explain myself: when a road is visible to everyone and its constant use can be verified, it is considered an apparent easement. It may be protected, first, through an action known as interdict to retention, which allows the user to keep possession of the route, and second, to address the substantive issue and acquire the easement right through an adverse possession proceeding, which, as noted, results in the acquisition of the right to use the area as an easement.)))



LA NUEVA LEY DE APP: ¿UN CAMBIO DE RUMBO PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL PERÚ?

Un modelo que marcó la pauta

Desde los años noventa, la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) se han consolidado como una de las políticas públicas más estables en el Perú. Este esquema ha permitido desarrollar proyectos de infraestructura y servicios públicos, basado en un régimen jurídico especial, generando beneficios tangibles para la competitividad y el crecimiento económico del país.

¿Por qué una nueva ley?

A pesar de los avances logrados, persisten desafíos que limitan el verdadero potencial de las APP: falta de alineamiento de objetivos, dispersión funcional, demoras en la toma de decisiones, incumplimientos administrativos, adquisición de predios y liberación de interferencias oportunas, entre otros.

Tras haber transitado por cuatro marcos normativos —el TUO de Concesiones (1996), los Decretos Legislativos n.º 1012, n.º 1224 y n.º 1362, la reciente Ley n.º 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante APP y Proyectos en Activos— surge como una respuesta para modernizar el sistema, orientada a implementar un programa de APP más eficiente, alineado con estándares internacionales y enfocado en proyectos maduros que garanticen infraestructura pública y servicios efectivos para la ciudadanía.

El corazón de la reforma

La nueva Ley de APP no es un ajuste menor: sustituye al Decreto Legislativo n.º 1362 y plantea una reorganización profunda del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP). A continuación, se detallan sus principales implicancias:



DAYANA CUBA GALLARDO

Asociada, experta en infraestructura, APP y Oxi
Associate, expert in infrastructure, PPP and
infrastructure work for taxes
dcuba@munizlaw.com

Desde los años noventa, la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) se han consolidado como una de las políticas públicas más estables en el Perú.

1. Rediseño institucional

Proinversión asume el rol de entidad pública titular del proyecto (EPTP) para el Gobierno Nacional, gestionando todo el ciclo de vida del proyecto: formulación, suscripción de contratos, administración y resolución de controversias, etc. Este modelo, común en países miembros de la OCDE (incluyendo Chile a través del MOP y la ANI de Colombia), busca dotar de continuidad técnica y reducir la alta rotación y limitada capacidad operativa observada en algunas entidades.

Se elimina la obligación de crear Organismos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP), apostando por la concentración funcional en Proinversión. No obstante, el éxito de este esquema dependerá del reforzamiento integral a las unidades especializadas dentro de Proinversión (recursos humanos, presupuesto institucional, enfoque de unidad de objetivo) para evitar cuellos de botella o saturación y garantizar que la nueva asignación de funciones no afecte la calidad del análisis técnico, legal y económico.

2. Simplificación procedimental

Se eliminan duplicidades con el sistema Invierte.pe y se agilizan procesos para proyectos específicos, como líneas de transmisión eléctrica o proyectos con componente exclusivo de operación y mantenimiento. Además, se introduce la “Capacidad de Financiamiento” y una planificación centralizada de los proyectos APP a cargo de Proinversión mediante un decreto supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

3. Opinión regulatoria y adecuación contractual

Se delimita el alcance de las opiniones de los reguladores a aspectos esenciales (niveles de servicio, acceso, tarifas). Los contratos vigentes se adecuarán automáticamente al nuevo régimen, salvo incompatibilidades expresas, evitando renegociaciones innecesarias.

4. Sostenibilidad económica y financiera

La nueva Ley de APP mantiene el rol de control fiscal del MEF: conserva su opinión vinculante sobre capacidad presupuestal, compromisos firmes y contingentes explícitos, garantías financieras y no financieras, y equilibrio económico-financiero marginal en proyectos mayores a 100 mil UIT (S/. 535 millones). Esta arquitectura pretende asegurar que el Estado asuma únicamente obligaciones que pueda administrar sin comprometer su estabilidad fiscal, especialmente en un contexto de creciente demanda por infraestructura.

5. Modificación contractual y transparencia

La ley admite reglas especiales para modificaciones por inversiones adicionales, inversiones dentro o fuera del área de la concesión, e incluso cuando su incorporación supere el plazo de la concesión; asimismo, reconoce cláusulas de compensación por incumplimientos del Estado. Frente a ello, corresponderá al reglamento establecer límites claros que brinden mayor claridad sobre los criterios y operatividad para su aplicación. Además, se amplían las obligaciones de transparencia y trazabilidad en los procesos de selección.

¿Qué viene ahora?

El verdadero impacto de la Ley n.º 32441 dependerá de su reglamento. Con la próxima publicación de este último, se espera que el Perú cuente con un marco regulatorio más coherente y predecible para atraer inversión privada y cerrar brechas de infraestructura de manera sostenible. »

The New PPP Law: A Transformative Shift for Infrastructure Investment in Peru?

A Benchmark Model

Since the 1990s, the promotion of private investment through Public-Private Partnerships (PPP) has emerged as one of the most enduring public policies in Peru. This framework has facilitated the development of vital infrastructure projects and enhanced public services by leveraging a specialized legal regime. As a result, it has generated tangible benefits for the country's competitiveness and economic growth.

Why a New Law?

Despite significant progress, numerous challenges continue to hinder the full potential of PPPs. Key issues such as misalignment of objectives, functional dispersion, delays in decision making, administrative non-compliance, and complications in land acquisition and timely resolution of interferences persist.

Having navigated through four regulatory frameworks - the Single Amended Text (TUO) on Concessions (1996) and Legislative Decrees No. 1012, No. 1224 and No. 1362-the current Law No. 32441 emerges as a vital solution to modernize the PPP system. This new legislation is designed to implement a more efficient PPPs and Projects in Assets that align with international standards and prioritizes mature projects. By doing so, it aims to enhance the provision of public infrastructure and deliver effective services to citizens.

The Heart of the Reform

The new PPP Law represents more than just a minor adjustment; it fundamentally replaces Legislative Decree No. 1362 and introduces a comprehensive restructuring of the National Private Investment Promotion System (SNPIP). This reform brings significant implications, which are outlined as follows:

1. Institutional Redesign

Proinversion will now take on a pivotal role as the Public Project Management Office (EPTP, acronym in Spanish) for the National Government, overseeing the entire project lifecycle-from formulation and contract signing to administration and dispute resolution, etc. This model, which is prevalent among OECD member countries (such as Chile (via the Ministry of Public Works, MOP) and Colombia (via the National Infrastructure Agency, ANI), aims to deliver technical continuity while addressing the high turnover and limited operational capacity often observed in various entities.

With the elimination of the obligation to establish Specialized Agencies for the Management and Execution of Projects (OEGEP), the focus shifts to consolidating functions within Proinversion. However, the success of this new framework hinges on the comprehensive strengthening of specialized units within Proinversion, including enhancements in human resources, institutional budget allocations, and a targeted approach to unit objectives. This reinforcement is crucial to prevent bottlenecks or operational saturation, ensuring that the reallocation of responsibilities does not compromise the quality of the technical, legal, and economic analysis essential for effective project execution.

2. Procedural Simplification

The new law aims to eliminate duplicative processes by integrating with the Invierte.pe system, thereby streamlining procedures for specific projects, including power transmission lines and those primarily focused on exclusive operation and maintenance components. Additionally, it introduces the concept of "Financing Capacity" and establishes centralized planning for PPP projects under the management of Proinversion, facilitated by a supreme decree issued by the Ministry of Economy and Finance (MEF).

3. Regulatory Opinion and Contractual Adequacy

The scope of regulatory opinions under the new PPP Law is focused on key aspects, including service levels, access, and tariffs. Existing contracts will be automatically aligned with the new regulatory

framework, provided there are no explicit incompatibilities, thus minimizing the need for unnecessary renegotiations.

4. Economic and Financial Sustainability

The new law upholds the Ministry of Economy and Finance's (MEF) critical role in fiscal oversight. It retains its binding authority on budgetary capacity, explicit commitments—both firm and contingent—financial and non-financial guarantees, and the assessment of marginal economic-financial balance for projects exceeding 100,000 Tax Unit (UIT) S/... (approximately USD 535 million). This robust framework is designed to ensure that the State only undertakes obligations it can effectively manage, safeguarding fiscal stability in the face of increasing demand for infrastructure investment.

5. Contractual Amendment and Transparency

The new law allows for special provisions regarding contractual amendments related to additional investments, whether these are made within or outside the concession area, and even when such amendments extend beyond the original concession term. It also acknowledges compensation clauses for instances of non-compliance by the State. In this context, it will be the responsibility of the regulations to establish clear limits, enhancing the clarity regarding the criteria and procedures for these applications. Furthermore, the law expands obligations related to transparency and traceability throughout the selection processes.

What's Next?

The true impact of Law No. 32441 hinges on its forthcoming regulations. With the anticipated publication of these regulations, Peru aims to establish a more coherent and predictable regulatory framework. This framework is expected to enhance the attractiveness of the country for private investment while effectively addressing infrastructure gaps in a sustainable manner. »

Definición del concepto de “servicio digital”: giro hacia la seguridad jurídica



CÉSAR CASTILLO DEL ÁGUILA

Asociado senior, experto en derecho tributario
Senior associate, expert in tax law
ccastillod@munizlaw.com

En menos de un año, la Sunat modificó de manera significativa su interpretación sobre lo que debe entenderse como servicio digital a efectos del impuesto a la renta, generando un cambio relevante en la tributación de servicios prestados por sujetos no domiciliados.

Mediante el Informe N° 000039-2024-SUNAT/7T0000 (6 de junio de 2024), la Sunat adoptó un criterio amplio y errado que incluía determinados servicios no automáticos dentro de la categoría de servicios digitales. Señaló que los servicios enumerados en el segundo párrafo del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, RLIR) calificaban como digitales incluso si no cumplían alguna o varias de las características generales previstas en el primer párrafo de dicha norma. Solo en los casos no contemplados en el listado debía verificarse el cumplimiento de tales características.

El análisis se basó en el artículo 4-A del RLIR, que define como servicio digital aquel puesto a disposición del usuario a través de internet, caracterizado por ser esencialmente automático y no viable sin tecnología de la información. No obstante, la Sunat sostuvo que el listado del segundo párrafo —que menciona, entre otros, el soporte técnico al cliente en red y el acceso electrónico a consultoría— debía entenderse como una relación de servicios digitales por naturaleza, aun sin automatización.

En consecuencia, consideró que los servicios de soporte técnico en línea y los de consultoría por videoconferencia o correo electrónico calificaban como servicios digitales gravados, aunque fueran ejecutados por personas. En esa línea, se priorizó la naturaleza digital del medio por encima del grado de intervención humana.

Sin embargo, en el Informe N° 000046-2025-SUNAT/7T0000 (29 de abril de 2025), la Sunat revocó expresamente esta posición, precisando que solo los servicios que cumplan todas las características del primer párrafo del artículo 4-A del RLIR pueden considerarse digitales, destacando entre ellas el carácter esencialmente automático de dichos servicios.

Bajo este nuevo enfoque, los servicios de soporte técnico con intervención humana o de consultoría presencial o virtual no califican como digitales, pues los medios tecnológicos (correo electrónico, videoconferencia, plataformas) actúan solo como canales de comunicación, y no como mecanismos de prestación automática. La Sunat enfatizó que lo determinante no es la digitalización del medio, sino la automatización del servicio: solo cuando la tecnología sustituye de forma sustancial la intervención humana, se configura un verdadero servicio digital.

Este viraje redefine el alcance del inciso i) del artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 4-A de su Reglamento, delimitando con mayor precisión las operaciones sujetas a retención por servicios digitales prestados desde el exterior, y aportando un mayor grado de seguridad jurídica a las actuaciones de la Sunat.

El nuevo criterio busca armonizar el tratamiento tributario con la finalidad original de la norma, evitando confundir los servicios digitales automatizados con los servicios tradicionales que solo emplean medios electrónicos. No obstante, plantea un desafío práctico: determinar el nivel de automatización necesario para calificar un servicio como digital, en un contexto donde la frontera entre la intervención humana y la tecnológica es cada vez más difusa.

En definitiva, la Sunat ha pasado de una interpretación amplia y errónea a una lectura técnica y restrictiva del concepto de servicio digital. Este cambio, aunque coherente con el texto reglamentario, demanda mayor claridad normativa que garantice seguridad jurídica a los contribuyentes y coherencia en la aplicación de las reglas sobre tributación internacional en la creciente economía digital. »

Defining “Digital Services”: A Shift Towards Legal Certainty

In less than a year, the Peruvian Tax Administration (SUNAT) has significantly changed its interpretation of what digital service means for income tax purposes, resulting in a relevant change in the taxation of services rendered by non-domiciled providers.

Through Report No. 000039-2024-SUNAT/7T0000 (June 6, 2024), SUNAT adopted a broad and erroneous criterion that included certain non-automatic services within the category of digital services. The report states that the services listed in the second paragraph of Article 4-A of the Income Tax Law Regulations (hereinafter, RLIR) qualified as digital services even if they did not meet one or more of the general characteristics set forth in the first paragraph of that provision. Only cases not covered by the list were required to comply with these characteristics.

The analysis was based on Article 4-A of the RLIR, which defines digital services as those made available to the user through the Internet, characterized by being essentially automated and not viable in the absence of technology. However, SUNAT held that the list in the second paragraph—which included online customer technical support and electronic access to consulting services, among others—should be deemed as a list of services that are digital in nature, even without automation.

Consequently, technical support and consulting services rendered via online platforms, email, or videoconference were deemed to qualify as taxable digital services, even if they were performed by individuals. Along these lines, the digital nature of the means through which services were delivered was prioritized over the degree of human intervention.

However, in Report No. 000046-2025-SUNAT/7T0000 (April 29, 2025), SUNAT expressly revised this position, specifying that only those services that meet all the characteristics outlined in the first paragraph of Article 4-A of the RLIR shall qualify as digital services, specifically, highlighting among them the essentially automatic nature of such services.

Under this new approach, technical support services involving human intervention or face-to-face or virtual consulting services do not qualify as digital services, since the technological means (e-mail, videoconferencing, platforms) act only as communication channels, and not as automatic delivery mechanisms. SUNAT emphasized that the determining factor is not the digitization of the means, but rather the automation of the service: only when technology substantially replaces human intervention can a true digital service exist.

This shift redefines the scope of Article 9 paragraph i) of the Income Tax Law and Article 4-A of its Regulations, more precisely delimiting the operations subject to withholding for digital services provided from abroad, and providing a greater degree of legal certainty to SUNAT's actions.

The new criterion seeks to harmonize the tax treatment with the original purpose of the regulation, avoiding confusion between automated digital services and traditional services that only use electronic means. However, it poses a practical challenge: determining the level of automation required to qualify a service as digital services, in a context where the boundary between human and technological intervention is increasingly blurred.

In short, SUNAT has moved from a broad and erroneous interpretation to a technical and restrictive construction of the concept of digital services. This change, although consistent with regulation, calls for greater regulatory clarity to ensure legal certainty for taxpayers and consistency in the application of international taxation rules in the growing digital economy. »

La inteligencia artificial y la justicia laboral en el Perú: ¿avance o amenaza para la tutela jurisdiccional efectiva de derechos?



DANIEL ROMERO ZULOAGA

Asociado, experto en derecho laboral y seguridad social
Associate, expert in labor and social security law
dromeroz@munizlaw.com

El proceso laboral peruano, a partir de la vigencia de la Ley n.º 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), se ha caracterizado por incorporar principios como la oralidad, intermediación y concentración, con el propósito de garantizar una justicia más rápida y efectiva. Sin embargo, los retos actuales van más allá de lo normativo: la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia plantea un debate ineludible sobre su compatibilidad con la tutela de los derechos laborales.

Este ensayo explora las ventajas y riesgos del uso de la IA en la justicia laboral peruana, a la luz de la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema, así como las tendencias internacionales.

La Constitución Política del Perú garantiza en su artículo 139, inciso 3, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. En materia laboral, este mandato adquiere un carácter reforzado, pues el artículo 23 dispone que el trabajo es objeto de protección especial por parte del Estado.

El Tribunal Constitucional ha establecido que el proceso laboral debe orientarse a la materialización de los derechos fundamentales del trabajador, aun frente a formalismos procesales¹. Por ello, cualquier innovación tecnológica —incluida la IA— debe ser evaluada a la luz del principio de protección y la primacía de la realidad.

La Corte Suprema, en las Casaciones Laborales n.º 19687-2015/LIMA, 8222-2016/ÁNCASH y 24239-2018/LIMA, precisó que la verdadera naturaleza de una relación laboral no depende de la denominación contractual, sino de la verificación de sus elementos esenciales: prestación personal, remuneración y subordinación. Este razonamiento refleja que el juez laboral debe aproximarse a la verdad material, un ejercicio que difícilmente puede delegarse en algoritmos preprogramados.

La IA, al operar mediante patrones y análisis estadísticos, podría limitar la aplicación del principio de primacía de la realidad, debilitando la función tuitiva del juez.

En el derecho comparado, países como Estonia y España han iniciado proyectos piloto para incorporar IA en la justicia. No obstante, organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han advertido que el uso de estas tecnologías no debe sacrificar principios como la imparcialidad, la igualdad procesal y la valoración integral de la prueba².

Si bien la IA puede agilizar la tramitación y reducir la carga procesal, su implementación en materia laboral exige un control humano estricto y mecanismos de transparencia que aseguren decisiones justas.

La introducción de la inteligencia artificial en la justicia laboral peruana representa un dilema contemporáneo: eficiencia frente a humanización del proceso. La IA —entonces— puede constituir un valioso instrumento auxiliar y no debe sustituir la función del juez laboral, quien encarna el deber constitucional de proteger al trabajador frente a la desigualdad estructural de la relación laboral.

En consecuencia, el desafío del legislador y del Poder Judicial será establecer un marco normativo y ético que permita aprovechar las ventajas de la tecnología sin desnaturalizar los principios que sustentan el derecho del trabajo. ¶

¹ Tribunal Constitucional, STC Exp. n.º 00157-2021-PA/TC (Caso Raúl Vela Amasifuén).

² Organización Internacional del Trabajo (Conferencia Internacional del Trabajo, 113.ª reunión, 2025). El trabajo decente en la economía de plataformas.

Artificial intelligence and labor justice in peru: Is it progress or a threat to the effective judicial protection of rights?

The Peruvian labor process, since Law No. 29497, New Labor Procedural Law (NLPT, acronym in Spanish) became effective, has incorporated principles such as orality, immediacy and concentration, with the purpose of ensuring the faster and more effective provision of justice. However, current challenges go beyond the regulatory scope: the emergence of the Artificial Intelligence (AI) in justice administration raises an unavoidable debate regarding its compatibility with labor rights protection.

This essay explores the advantages and risks of using AI in Peru's labor justice system, in the light of the Constitution, the jurisprudence of the Constitutional Court (TC) and the Supreme Court, as well as the international trends.

The Political Constitution of Peru guarantees, in Section 139, subsection 3, compliance of the due process and effective judicial protection of rights. In labor matters, this mandate is reinforced as Section 13 provides that work is subject to special protection by the State.

The Constitutional Court has set out that labor proceedings must be directed towards the realization of the worker's fundamental rights, even in the face of procedural formalism¹. Therefore, any technological innovation—including IA—must be assessed in the light of principle of protection and primacy of reality.

The Supreme Court, in Labor Cassation appeals No. 19687-2015/LIMA, 8222-2016/ÁNCASH and 24239-2018/LIMA, clarified that the nature of a work relationship does not depend on the contractual denomination, but in the verification of its essential elements: labor service tenancy, compensation and subordination. This reasoning reflects that labor judges must approach the material truth, an exercise that can hardly be delegated to pre-programmed algorithms.

The AI, by operating through patterns and statistical analysis, may constrain the application of the principle of the primacy of reality, thereby weakening the judge's protective function.

In comparative law, countries such as Estonia and Spain have started pilot projects to incorporate AI in justice. Nevertheless, entities such as International Labour Organization (ILO) have warned that the use of these technologies must not sacrifice principles such as impartiality, procedural equality and comprehensive evaluation of evidence².

While AI may expedite proceedings and reduce procedural workload, its implementation in labor matters requires strict human oversight and transparency mechanisms that ensure fair decisions.

The introduction of the Artificial Intelligence into Peru's labor justice represents a contemporary dilemma: efficiency against humanization of the process. So AI may incorporate a valuable auxiliary tool and should not replace the role of the labor judge, who embodies the constitutional duty of protecting workers in the face of the structural inequality inherent to the employment relationship.

Consequently, the challenge for the legislator and the Judiciary will be to set out a regulatory and ethical framework that allows taking the advantages of technology without distorting the principles that underpin labor law.)))

¹ Constitutional Court, STC (Constitutional Court Judgment) N° 00157-2021-PA/TC (Raúl Vela Amasifúen Case).

² International Labour Organization (International Labour Conference, 113th Session, 2025). Decent work in the platform economy.



Procesos judiciales contra el Estado peruano

Como todos los abogados procesalistas sabemos, una sentencia judicial puede demorar tres, cinco o más años, dependiendo la complejidad del caso. Evidentemente, ese tiempo resulta alarmante e incluso poco alentador, pero, sorprendentemente, puede quedar muy corto en comparación cuando una de las partes procesales es el Estado peruano.

Sin profundizar en los cambios a nivel administrativo que tiene cada ministerio o entidad pública, nos enfrentamos a una realidad desafiante: ¿qué juez dictaminará en contra de una entidad pública? Una pregunta controversial, sin duda.

Existen procesos judiciales en materia civil en los cuales el Estado forma parte, y que la emisión de una sentencia en primera instancia puede demorar inclusive más de veinte años, como es de conocimiento público.

En este lapso, el proceso judicial ha sido evaluado por varios magistrados, llevándose a cabo más de una docena de informes orales, incontables entrevistas e impulsos ante el juzgado a cargo, quienes, por motivos ajenos al proceso, se han visto limitados de emitir un pronunciamiento o fallo.

¿Cómo nos afecta esta lentitud?

Como abogados, no solo nos encargamos de la defensa de nuestros clientes, también somos responsables de dar una solución relativamente rápida a sus procesos. Frente a las demoras judiciales, la única respuesta que se suele dar a los clientes es “la carga procesal del juzgado”, pero ¿estamos seguros de que esa es la única razón?

Muchos discreparán conmigo y justificarán al Poder Judicial, argumentando que en ese tiempo hubo rotación de jueces, cambios normativos, políticas internas, etc. Sin embargo, dependiendo de la

demora, frente al caso también habrá designación de nuevos abogados, cambios en los funcionarios de las empresas, crisis económica y política, entre otras circunstancias naturales.

Entonces, al asumir el patrocinio de un proceso cuya única acción faltante es la sentencia, nos vemos con las manos atadas en la vía judicial. El recurso de queja no es opción, pues hubo rotación judicial y sabemos que muchas veces puede jugarnos en contra. Entonces, ¿qué solución podemos dar? ¿cómo agilizamos o intentamos mejorar esta crisis?

Para poder ejemplificar lo narrado, me permito contar un caso que tengo bajo mi patrocinio, materia responsabilidad civil y, obviamente, una de las partes es el Estado. Sorprendentemente este proceso inició cuando yo aún estaba cursando sexto grado de primaria y prefiero no indicar la fecha en la que se produjo el supuesto daño. Para poder conocer a fondo el caso, revisé múltiples folios, muchos de ellos rotos, incompletos, rayados o maltratados, pues en esos años (2005-2013) la digitalización de expedientes era inexistente.

Sin afán de exagerar, pasé semanas en la sala de lectura del Poder Judicial para recopilar nuevamente toda la información del caso y poder dar un resumen al nuevo juez a cargo, esperando que se logre emitir una sentencia, después de tantos años. Lastimosamente, pese al gran esfuerzo, el juez fue nuevamente cambiado y no se emitió ningún dictamen, otra vez.

Ante una insistencia incansable de impulsos diarios, el nuevo juez titular emitió la sentencia en primera instancia, sí, como lo dije línea arriba, después de veinte años. Al visualizar la sentencia descargada del portal web del Poder Judicial, sentí una emoción indescriptible tras obtener un resultado después de tantos años. Sin embargo, la efervescencia duró segundos; pues la sentencia estaba mal hecha y fue declarada nula.

A la fecha, nuevamente nos encontramos en primera instancia, con la esperanza de que el juez a cargo tenga la capacidad de emitir una decisión motivada, sin vicios que nos mantengan en el mismo estado del proceso por más años.

En ese sentido, desde mi experiencia, dejo en evidencia que los procesos judiciales en materia civil contra el Estado peruano tienen una tendencia a dilatarse que imposibilita que los abogados podamos

señalar una fecha aproximada del término del proceso. Este problema debe ser analizado y tenemos la responsabilidad de buscar soluciones para evitar que esta recurrencia siga existiendo.)))

Como todos los abogados procesalistas sabemos, una sentencia judicial puede demorar tres, cinco o más años, dependiendo la complejidad del caso. Evidentemente, ese tiempo resulta alarmante e incluso poco alentador, pero, sorprendentemente, puede quedar muy corto en comparación cuando una de las partes procesales es el Estado peruano.



ALEJANDRA BALLÓN GODOY
Asociada, experta en el área de litigios
Associate, expert in litigation
aballon@munizlaw.com

Judicial proceedings against the Peruvian State

As all senior trial attorneys in law know, a judicial judgment may take three, five, or more years, depending on how complex the case is. Clearly, that time is alarming and even discouraging, but, surprisingly, it can seem very short compared to the case when one of the parties to the proceedings is the Peruvian State.

Without going into detail about the administrative reforms affecting each ministry or public entity, we face a challenging reality: will any judge ever rule on against a public entity? No doubt this is a highly controversial question.

There are civil judicial proceedings in which the State is a party, and getting a first-instance judgment can take even more than twenty years, as is widely known.

During this period, the judicial proceedings have been assessed by several judges, with more than a dozen oral reports, countless interviews and motions before the court in charge, which, for reasons unrelated to the substance of the case, have been unable to rule on or issue a decision.

How does this delay affect us?

As attorneys in law, we not only defend our clients, but we are also responsible for providing a relatively quick solution to their proceedings. Faced with judicial delays, the only response often given to customers is “the procedural workload”, but, is this is the only reason?

Many will disagree with me and justify the Judiciary, arguing that during that time there was turnover of judges, regulatory changes, internal policies, etc. However, depending on the delay, the case will also suffer from the appointment of new attorneys in law, officer changes at companies, economic and political crisis, among other natural circumstances.

So, when we take on representation of a case which only missing action is the judgment, we find ourselves hand-tied in the judicial system. The complaint is not a viable option, since there was judicial turnover and we know that many times it can backfire on us. So, what solution can be offered? How can this crisis be sped up or improved?

To illustrate what is described above, allow me to recount a case that I am currently handling, involving civil liability, in which, of course, one of the parties is the State. Surprisingly, this proceeding began when I was still in the sixth grade of elementary school, and I prefer not to indicate the date on which the alleged damage occurred. In order to thoroughly

understand the case, I reviewed multiple pages, many of them torn, incomplete, scribbled on, or damaged, since during those years (2005–2013) case-file digitization was nonexistent.

No exaggeration, I spent weeks in the Judiciary’s reading room gathering all the information in the case so that I could provide a summary to the new judge in charge, hoping that a judgment would finally be issued after so many years. Unfortunately, despite the significant effort, the judge was replaced once again, and no advisory opinion was issued, yet again.

After relentless daily follow-ups, the new presiding judge finally issued the first-instance judgment, yes, as I mentioned above, after twenty years. Upon viewing the judgment downloaded from the Judiciary’s online portal, I felt an indescribable sense of emotion after obtaining a result following so many years. However, that excitement lasted only seconds, as the judgment was poorly drafted and was declared null.

As of today, we once again find ourselves at the first-instance stage, hoping that the judge in charge will be able to issue a well-reasoned decision, free of defects that would keep the case stalled in the same procedural state for more years.

In that regard, based on my experience, I provide evidence that civil judicial proceedings against the Peruvian State tend to drag on, making it impossible for us attorneys in law to provide an approximate date for the completion of the process. This issue must be examined, and we have the responsibility to look for solutions so that this recurrent problem stops.)))



Los contratos menores en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas

A propósito de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas – Ley 32069 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009-2025-EF, uno de los cambios más relevantes es la redefinición del tratamiento de los ahora denominados “contratos menores”, un procedimiento simplificado que realizan las entidades del Estado para contratar bienes, servicios u obras sin llevar a cabo un procedimiento de selección competitivo y para atender necesidades de menor complejidad, cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que en el año 2025 asciende a S/ 42,800.00.

Anteriormente, este tipo de contrataciones tenían un tratamiento menos riguroso con estándares de control menores en comparación con los procedimientos de

selección competitivos. Sin embargo, con la reforma de la normativa de contrataciones públicas, actualmente los contratos menores dejan de ser una excepción y pasan a integrarse plenamente en el régimen general de contratación pública y, por tanto, quedan sujetos a regulación y supervisión directa del Organismo Especializado para las Contrataciones del Estado (OECE).

Esta modificación trae consigo que, aun cuando la contratación sea de mínima cuantía, las entidades públicas estén obligadas a observar principios como el de transparencia, competencia efectiva y valor por dinero. Este último, recientemente incorporado, implica que no basta con pagar menos, sino con gastar mejor, priorizando eficiencia y calidad. Ello guarda sentido en la medida que, aunque representan montos

individuales bajos, los contratos menores representan un volumen significativo del gasto público.

En ese sentido, se espera que esta modalidad ya no sea un atajo para agilizar compras sin suficiente sustento; por el contrario, ahora cada entidad debe elaborar un requerimiento claro y debidamente justificado, y además publicar íntegramente la información referida a estos contratos —desde las actuaciones preparatorias, las cotizaciones recibidas, la certificación presupuestaria, la notificación de la orden de compra o servicio, suscripción del contrato, hasta la ejecución del último pago o la notificación de la resolución del contrato menor— en la PLADICOP, la nueva plataforma integral que incluye al SEACE y es de acceso público. Ello con la finalidad de reforzar la trazabilidad de las operaciones y garantizar la transparencia en cada etapa.

Otro cambio particularmente relevante es la incorporación de dos nuevas infracciones aplicables a los contratos menores. Con ello, actualmente existen seis tipos de infracciones a tener en cuenta. A continuación, se detallan junto con sus respectivas sanciones:

INFRACCIÓN	SANCIÓN	
Negarse injustificadamente a cumplir obligaciones con posterioridad al pago. (*)	MULTA	Para la primera o segunda infracción en los últimos 4 años: no menor del 3 % ni mayor del 10 % del monto de la oferta económica o del contrato.
Suscribir contratos sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad de libre contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP.		Cuando existen más de 2 multas en los últimos 4 años: inhabilitación temporal por un periodo no menor de 3 ni mayor de 12 meses.
Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, siempre que dicha resolución haya quedado consentida. (*)	INHABILITACIÓN TEMPORAL	Por un periodo no menor de 6 meses ni mayor de 24 meses.
Contratar con el Estado estando impedido.		
Presentar información inexacta.	INHABILITACIÓN TEMPORAL	Por un periodo no menor de 24 meses ni mayor de 60 meses.
Presentar documentos falsos o adulterados.		

(*) Infracciones no contempladas en la anterior normativa.

Con relación a las infracciones antes descritas, es importante destacar que, a diferencia de la norma anterior, el nuevo régimen sí establece que la infracción relacionada con ocasionar que la entidad resuelva el contrato es aplicable también para los contratos menores, siendo este un punto importante a tener en cuenta por los proveedores a efecto de realizar una correcta y oportuna ejecución de cada contrato.

De otro lado, con relación a las multas, la Ley establece que, para los contratos menores, el Tribunal de Contrataciones Públicas tiene la facultad de imponer una multa por debajo de los montos indicados,

teniendo en cuenta los criterios de gradualidad de sanción, multas que podrían ir desde el 1 % al 3 % del monto de la oferta económica o del contrato, y cuando no sea posible determinar dichos montos, la multa podrá ser por 1 UIT hasta 3 UIT. Asimismo, en el Reglamento se establecen descuentos de hasta el 30 % por el pronto pago de dichas multas.

En definitiva, la regulación de los contratos menores en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas tiene como objetivo limitar los espacios de discrecionalidad que anteriormente han facilitado prácticas cuestionables como el fraccionamiento indebido de contrataciones, sobreprecios o adquisiciones que no responden a necesidades reales. Aunque actualmente la normativa establece procedimientos claros y más estrictos, la eficacia de este tipo de contrataciones finalmente dependerá de su correcta implementación y de la capacidad del OECE como órgano de control para supervisar y sancionar incumplimientos.

Sin duda alguna, el principal reto será verificar si, en la práctica, la implementación de esta nueva regulación logra mantener el equilibrio entre la simplicidad inherente a los contratos menores con el control del OECE, de manera que se garantice la rapidez en la atención de las necesidades de cada entidad sin comprometer la transparencia ni la integridad del proceso de contratación. 》》



ANA CRISTINA RIVERA ALARCÓN
Asociada, experta en procesos de selección
Associate, expert in recruitment processes
acrivera@munizlaw.com

Low-Value Contracts Under the New General Law on Public Procurement

The introduction of the new General Law on Public Procurement – Law 32069, along with its accompanying Regulations established by Supreme Decree 009-2025-EF, brings significant updates to the treatment of “low-value contracts.” These contracts represent a simplified procurement procedure used by Government entities to acquire goods, services, or works without the necessity of a competitive selection process. They cater to less complex needs, with contract values equal to or less than 8 Tax Units (UIT), which translates to S/ 42,800.00 in 2025.

Historically, low-value contracts were subjected to less stringent oversight, operating under lower control standards compared to competitive selection processes. However, the recent reform has fully incorporated low-value contracts into the general public procurement framework, effectively removing their status as an exception. Consequently, these contracts are now regulated and directly supervised by the Specialized Agency for State Contracting (OECE).

This amendment mandates that public entities, regardless of the minimal contract amount, adhere to essential principles such as transparency, effective competition, and value for money. The incorporation of “value for money” into the regulations emphasizes that procurement decisions should focus not only on cost savings but also on enhancing efficiency and quality. This approach is particularly relevant given that, while individual contracts may be low-value, collectively they represent a substantial portion of public expenditure.

In light of these reforms, it is anticipated that the low-value contracts modality will no longer serve as a shortcut for expediting purchases without adequate justification. Instead, each entity is now required to develop a clear and thoroughly justified procurement request. Additionally, all relevant information pertaining to these contracts must be published on PLADICOP, the new comprehensive platform that integrates SEACE and is accessible to the public. Information available includes details from the preparatory actions, quotations received, and budget certifications, to notifications of purchase or service orders, contract signing, the final payments, and notifications regarding the termination of low-value contracts. The aim is to enhance the traceability of operations and ensure transparency throughout every stage of the procurement process.

Moreover, a significant update is the introduction of two new offenses specific to low-value contracts, bringing the total number of infractions to six. These violations are outlined below, along with their corresponding penalties.

VIOLATION		SANCTION
Unjustified refusal to fulfill obligations after payment (*)	FINE	For the first or second time infraction in the last 4 years, the fine will range from a minimum of 3% to a maximum of 10% of the total amount of the economic offer or contract amount.
Entering into contracts without current registration in the RNP or exceeding the free contracting capacity, or contracting in specialties or categories not authorized by the RNP.		In cases where there are more than two (2) fines imposed within the last four (4) years, a temporary disqualification will be enforced, lasting no less than 3 months and no more than 12 months.
The entity may terminate the contract, provided that such termination has been consented (*)	TEMPORARY DISQUALIFICATION	For a period ranging from no less than 6 months to no more than 24 months.
Contracting with the State while under disqualification.		
Submitting inaccurate information.	TEMPORARY DISQUALIFICATION	
Presenting false or altered documents.		For a period ranging from no less than 24 months to no more than 60 months.

(*) Offenses not included in previous regulations.

Regarding the violations described above, it is important to note that, unlike the previous regulations, the new regime explicitly includes the violation related to causing the entity to terminate the contract as applicable to low-value contracts. This is an important consideration for suppliers, emphasizing the need for the correct and timely performance of each contract.

Additionally, in terms of fines, the Law grants the Public Procurement Tribunal the authority to impose penalties below the stipulated amounts for low-value contracts. The tribunal will take into account the principle of proportionality in sanctions, with fines potentially ranging from 1% to 3% of the economic offer or contract value. If it is not feasible to establish these amounts, fines may be set between 1 UIT and 3 UITs. Furthermore, the Regulation allows for discounts of up to 30% for prompt payment of such fines.

In summary, the regulation of low-value contracts under the new General Law on Public Procurement is designed to reduce discretionary powers that have historically enabled questionable practices, such as the undue fragmentation of contracts, overpricing, and acquisitions that do not align with actual needs. While the current regulations introduce clear and more stringent procedures, the ultimate effectiveness of this contracting approach will hinge on its proper implementation and the ability of the OECE as the oversight body to supervise and enforce compliance effectively.

The primary challenge lies in determining whether the practical application of this new regulation can successfully strike a balance between the inherent simplicity of low-value contracts and the oversight of the OECE. It is essential to ensure that the needs of each entity are met promptly, without compromising the transparency and integrity of the contracting process. 》



En el cuarto trimestre del 2025 destacaron dos proyectos de ley. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Proyecto que prohíbe el uso de celulares y medios digitales por parte de los trabajadores de atención directa al usuario en entidades financieras y bancos¹

La congresista Katy Ugarte, integrante de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, presentó el Proyecto de Ley n.º 13342/2025-CR que busca prohibir el uso de celulares y medios digitales personales a los trabajadores de atención directa al usuario en entidades financieras y bancos en el Perú.

De acuerdo con la propuesta, los equipos de trabajo y computadoras utilizados por los trabajadores de atención directa al usuario deberán tener acceso restringido únicamente a los sistemas de la entidad.

El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley será sancionado conforme a las normativas internas de cada entidad financiera o banco y a la regulación de la SBS, pudiendo incluir sanciones administrativas, disciplinarias y económicas.)))

Proyecto que modifica el artículo 2 de la Ley n.º 25129 para extender la asignación familiar, sin límite de edad, a trabajadores con hijos con discapacidad severa²

Mediante el Proyecto de Ley n.º 12873/2025-CR, el congresista de la Bancada Somos Perú, Alex Paredes, busca modificar la Ley n.º 25129 para ampliar el derecho a la asignación familiar otorgada a los trabajadores de la actividad privada, incorporando como beneficiarios a aquellos que tengan a su cargo hijos con discapacidad severa o padres adultos mayores en situación de dependencia.

De esta manera, tienen derecho a percibir esta asignación los trabajadores que cuenten a su cargo uno o más hijos mayores de dieciocho (18) años que presenten discapacidad severa, certificada conforme a las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional de Salud.)))

* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso, una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ Proyecto de ley 13342/2025-CR. <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzUxOTQ4/pdf>

² Proyecto de ley 12873/2025-CR. <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzMzMzY4/pdf>



Two bills stood out in the last quarter of 2025. Below, we present a summary of both proposals.

One bill seeks to prohibit the use of cell phones and digital media by customer service employees in financial institutions and banks¹

Congresswoman Katy Ugarte, a member of Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, presented Bill No. 13342/2025-CR, which seeks to prohibit the use of cell phones and personal digital devices by direct customer service workers in financial institutions and banks in Peru.

According to the proposal, the work equipment and computers used by customer service workers should have restricted access limited exclusively to the institution's systems.

Failure to comply with the provisions of this law shall result in penalties in accordance with the internal regulations of each financial institution or bank, as well as the regulations of the SBS, which may include administrative, disciplinary, and financial sanctions.)))

A bill has been proposed to amend Article 2 of Law No. 25129, aiming to extend the family allowance-without any age limit-to workers with children who have severe disabilities²

By means of Bill No. 12873/2025-CR, Congressman Alex Paredes, of Somos Perú caucus, aims at amending Law No. 25129 to broaden eligibility for the family allowance granted to workers in the private sector. This amendment seeks to include as beneficiaries those who have children with severe disabilities or elderly parents in a state of dependency.

As a result, workers with one or more dependent children over eighteen (18) years of age who have been certified with severe disabilities, in accordance with the regulations issued by the National Health Authority, will be entitled to receive this family allowance.)))

* Muñiz Law Firm presents to all its clients, on a bimonthly basis, the legal product *From Congress*, a publication that includes a selection of bills currently under discussion in the Congress of the Republic that may affect the business environment. In *Columns*, we will publish two of the several bills included in the publication that are still under review by congressional committees.

¹ Bill No. 13342/2025-CR <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzUxOTQ4/pdf>

² Bill No. 12873/2025-CR <https://api.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzMzMzY4/pdf>



RAÚL VIZCARRA CASTILLO

Socio, experto en derecho corporativo
Partner, expert in corporate law
rvizcarra@munizlaw.com

El espejismo del *negative leakage* en los mecanismos *lock-box*

Cómo una lectura errónea del modelo lleva a distorsionar la lógica del precio fijo en las transacciones M&A

Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en Perú típicamente han determinado el precio del *target* en venta en base a una serie de información financiera, preparada y estimada por el vendedor, a la fecha de cierre, la cual era posteriormente auditada y ajustada por el comprador. Este mecanismo, referido como “*completion accounts*”, otorga cifras más exactas al comprador respecto del *target* adquirido.

No obstante lo anterior, es cada vez más común que transacciones de M&A recurran a una determinación de valor conforme a un mecanismo de “*lock box*”, práctica originada en las transacciones de private equity europeo. Esto implica que las partes fijen el precio del *target* considerando información financiera histórica y acordada entre las partes, la cual ha sido habitualmente auditada y revisada a detalle por el comprador y sus asesores, y solo hagan ajustes al precio por extracciones de valor que puedan ocurrir entre la fecha de firma y la fecha de cierre (las llamadas fugas de valor, o “*leakages*”).

El appeal del mecanismo de “*lock box*” es claro – (i) permite establecer un precio fijo al *target*, en base a información financiera acordada y auditada entre las partes, y (ii) minimiza la necesidad de ajustes financieros posteriores al cierre (acotado a los leakages, en vez de tener que llevar a cabo una auditoría financiera detallada de manera posterior al cierre).

Si bien el mecanismo del *lock-box* es en apariencia sencillo, he podido apreciar que, en su importación al Perú, en algunas oportunidades lo equiparan como un mecanismo de ajuste al precio equivalente al de *completion accounts*, pudiendo arrojar tanto un valor positivo (lo que calificaría como *leakage*) como negativo (lo que llamaremos, para estos fines, un “*negative leakage*”) en la caja neta del *target*. Este último planteamiento, creemos, representa una falsa equiparación entre el mecanismo de *completion accounts* versus *lock-box*, que desnaturaliza los términos de esta figura y es ajena a la práctica de mercado en otras jurisdicciones, donde no se reconoce un derecho automático del vendedor a ajustes positivos.

1. El ajuste por *completion accounts* se basa en incertidumbre

Como hemos indicado, el mecanismo de ajuste al precio por *completion accounts* se da porque la información financiera para determinar el precio se basa en estimados preparados por el vendedor y sus asesores. El mecanismo de *lock-box* se basa en información financiera histórica y acordada previamente entre las partes, la cual ha sido materia de un *due diligence* financiero exhaustivo por el comprador. Esto reduce la incertidumbre respecto a la certeza y exactitud de esta información (lo cual, a su vez, debería estar acompañado de un sólido set de declaraciones y garantías).

2. Los *leakages* están bajo el control del vendedor

Si bien el comprador va a capturar el valor de la compañía desde la fecha del *lock-box* en adelante, la mayoría de las fugas relevantes suelen poder evitarse o documentarse por el vendedor (aunque no todas dependan de su conducta). El espacio de incertidumbre respecto de la exactitud de los montos a pagar es mínimo.

3. El planteamiento de un ajuste “negativo” perjudica al comprador

La ventaja del *lock-box* es establecer un precio fijo. Cualquier variación debe darse en beneficio del comprador, porque sería consecuencia de una fuga de valor del *target*. Permitir una fuga “negativa” implica tener que hacer un pago adicional al vendedor, distinto del precio fijo ya acordado.

4. Un ajuste negativo premia un comportamiento negligente del vendedor

Las fugas de valor, sean estas permitidas o no permitidas, están bajo el control del vendedor. Si es que el vendedor no efectúa todos los pagos que tiene que hacer, o los hace en un menor valor, ¿por qué tendría que ser recompensado con un reconocimiento en el ajuste? Podría darse un absurdo tan grande como que el vendedor pague de menos en una deuda con una relacionada (respecto de lo declarado al cierre), sea reembolsado, y luego la relacionada pueda reclamar al *target* directamente.

En consecuencia, somos de la opinión que el ajuste al precio por *leakages*, bajo el mecanismo de *lock-box*, solo debería resultar en reducciones al precio y no en ajustes positivos, o como un “*negative leakage*”. Permitir estos ajustes positivos es una distorsión conceptual, que equivale a reintroducir la incertidumbre propia de las *completion accounts* y trasladar al comprador riesgos que el *lock-box* busca evitar. »

The mirage of negative leakage in lock-box mechanisms

How a misreading of the model distorts the logic of fixed price in M&A Transactions

Mergers and acquisitions (M&A) transactions in Peru have typically determined the purchase price of the target on the basis of a set of financial information, prepared and estimated by the seller as of the closing date, which was later audited and adjusted by the buyer. This mechanism, known as the “completion accounts”, provides the buyer with more accurate figures regarding the acquired target.

However, it has become increasingly common for M&A transactions to rely on a valuation determined under a “lock-box” mechanism, a practice that originated in European private equity deals. This means that the parties set the purchase price of the target based on historical financial information agreed upon by both parties, information that is typically audited and thoroughly reviewed by the buyer and its advisors, and only make price adjustments for any extraction of value that may occur between the date signed and the closing date (the so-called “leakages”).

The appeal of the “lock-box” mechanism is clear – (i) it allows setting a fixed price of the target based on financial information agreed upon and audited by both parties, and (ii) it minimizes the need for post-closing financial adjustments (limited to leakages, instead of having to conduct a detailed financial audit after closing).

Although the lock-box mechanism may appear simple on the surface, I have observed that, when implemented in Peru, it is sometimes seen as a price adjustment mechanism equivalent to completion accounts. Under this interpretation, it may generate either a positive value (what would be qualified as a leakage) or a negative value (which, for our purposes, I will refer to as a “negative leakage”) in the net cash position of the target. We believe that the last approach represents a false equivalence between the completion accounts mechanism and the lock-box structure, which alters the terms of the legal concept and is unrelated to market practice in other jurisdictions, where the seller is not automatically entitled to upward price adjustments.

1. The price adjustment under completion accounts is based on uncertainty

As indicated above, the price adjustment mechanism under completion accounts arises because the financial information used to determine the price is based on estimates prepared by the seller and its advisors. The lock-box mechanism, on the other hand, relies on historical financial information previously agreed upon by the parties, which has been subject to exhaustive financial due diligence by the buyer. This reduces uncertainty regarding the reliability and accuracy of such information (which, in turn, should be supported by a solid set of Representations and Warranties).

2. Leakages are under the seller's control

Although the buyer will capture the company's value from the lock-box date onwards, most material leakages can usually be prevented or documented by the seller (even if not all depend on the seller's conduct). The scope of uncertainty with regards to the accuracy of the amounts to be paid is minimal.

3. The notion of a “negative” adjustment harms the buyer

The advantage of the lock-box is to establish a fixed price. Any variation should benefit the buyer, because it would result from a leakage from the target. Allowing a “negative” leakage implies having to make an additional payment to the seller, different from the fixed price already agreed.

4. A negative adjustment rewards negligent conduct by the seller

Leakages, whether allowed or not, are under the seller's control. If the seller fails to make all payments that must be made, or makes them for a lesser amount, why should the seller be rewarded with a positive recognition in the adjustment? This could lead to an absurd situation in which the seller who underpays a debt owed to an affiliate (compared to what was declared at closing) is reimbursed, and then the affiliate is able to claim the amount directly from the target.

Accordingly, our opinion is that a price adjustment for leakages under the lock-box mechanism should only result in downward price adjustments and never in positive adjustments, sometimes referred to as a “negative leakage”. Allowing these positive adjustments creates a conceptual distortion, it effectively reintroduces the uncertainty characteristic of completion accounts mechanisms and shifts onto the buyer the risks that the lock-box structure is designed to avoid.)))

AUTORIZAN LA EXPEDICIÓN DEL PASAPORTE OFICIAL Y DEL PASAPORTE DE EMERGENCIA

¿Qué norma se ha emitido?

Mediante Ley n.º 32457, emitida y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de septiembre de 2025, el Congreso de la República ha modificado los artículos 20, 21 y 22 del Decreto Legislativo n.º 1350 – Decreto Legislativo de Migraciones, autorizando la expedición del pasaporte oficial y del pasaporte de emergencia.

¿Cuál es su objeto?

La norma tiene por finalidad ampliar los tipos de pasaportes que puede emitir el Estado peruano, incorporando como nuevas categorías el pasaporte oficial y el pasaporte de emergencia.

Asimismo, se establece un régimen transitorio para la eliminación progresiva del salvoconducto y del pasaporte especial, fijando como fecha límite de emisión el 1 de julio de 2026. A partir de dicha fecha, se iniciará la emisión del pasaporte oficial y del pasaporte de emergencia.

¿Cuáles son las principales novedades del Decreto Legislativo n.º 1350?

Entre las principales modificaciones tenemos:

1. Nuevos tipos de pasaporte reconocidos (artículo 20 modificado)

El Estado peruano reconoce ahora cinco categorías de pasaporte:

- Pasaporte ordinario
- Pasaporte oficial (que reemplaza al pasaporte especial)
- Pasaporte diplomático
- Pasaporte de emergencia (de reciente creación)
- Otros pasaportes determinados por instrumentos internacionales

Además, se precisa que:

- Migraciones define las características técnicas y de seguridad del pasaporte ordinario.
- El Ministerio de Relaciones Exteriores define las características de los pasaportes oficial, diplomático y de emergencia, así como de otros previstos en tratados internacionales.

2. Pasaporte de emergencia para nacionales (artículo 21 modificado)

Las Oficinas Consulares del Perú en el exterior podrán expedir un pasaporte de emergencia a ciudadanos peruanos únicamente cuando:

- no sea posible emitir un pasaporte ordinario; y
- sea indispensable para continuar un viaje que culmine con el retorno al territorio peruano o al país de residencia del nacional.

3. Pasaporte de emergencia para menores nacidos en el extranjero (nuevo artículo 22)

De manera excepcional, se permite la expedición de un pasaporte de emergencia a menores nacidos en el exterior, hijos de padre o madre peruanos por nacimiento, cuando:

- el nacimiento aún no haya sido inscrito en el Reniec, y
- se requiera la continuación del viaje con destino al Perú o al país de residencia.

Este documento no sustituye la obligación de inscribir el nacimiento en el Reniec ni genera efectos registrales.

¿Cuándo entra en vigencia?

La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo deberá adecuar el Reglamento del Decreto Legislativo n.º 1350 (aprobado por D.S. n.º 007-2017-IN) en un plazo de 120 días calendario contados desde la entrada en vigor de esta ley.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará emitiendo salvoconductos y pasaportes especiales hasta el 1 de julio de 2026, fecha en la que iniciará formalmente la emisión de pasaportes oficiales y de emergencia.

Puede acceder al texto completo de la Ley n.º 32457 en el siguiente enlace URL: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2443951-1>

AUTHORIZATION FOR THE ISSUANCE OF OFFICIAL AND EMERGENCY PASSPORTS

What regulation has been issued?

By means of Law No. 32457, published in the Official Gazette El Peruano on September 30, 2025, the Congress of the Republic has amended Articles 20, 21, and 22 of Legislative Decree No. 1350 - the Legislative Decree on Migration. This amendment authorizes the issuance of both official and emergency passports.

What is its purpose?

The purpose of this regulation is to broaden the types of passports that may be issued by the Peruvian State, introducing new categories including the official passport and the emergency passport.

It also establishes a transitional regime aimed at the progressive phasing out of the laissez-passer and special passport, with July 1, 2026, set as the deadline for their issuance. As of that date, the issuance of official and emergency passports will begin.

What are the main novelties of Legislative Decree No. 1350?

These are the key amendments:

1. New passports types (Article 20 as amended)

The Peruvian State now recognizes five categories of passports:

- Ordinary Passport
- Official Passport (replacing the special passport)
- Diplomatic Passport
- Emergency Passport (newly created)
- Other passports determined by international instruments.

In addition, the following is specified:

- The migration authorities shall define the technical and security features of the ordinary passport.
- The Ministry of Foreign Affairs shall establish the characteristics of official, diplomatic, and emergency passports, along with other passports stipulated in international treaties.

2. Emergency Passport for Peruvian Nationals (Article 21 as amended)

Peruvian Consular Offices abroad are authorized to issue an emergency passport to Peruvian citizens under the following conditions:

- when the issuance of an ordinary passport is not feasible, and
- when it is essential for the individual to continue their trip, culminating in their return to Peruvian territory or their country of residence.

3. Emergency Passport for Minors Born Abroad (New Article 22)

Exceptionally, an emergency passport may be issued to minors born abroad who are children of Peruvian citizens by birth, under the following conditions:

- when the birth has not yet been registered with Reniec, and
- when it is necessary for the child to continue their trip to Peru or their country of residence.

This document does not replace the obligation to register the birth with Reniec, nor does it result in any recording of such birth.

When does it become effective?

This regulation will become effective the day after its publication. However, the Executive Branch is required to update the Regulations of Legislative Decree No. 1350 (as approved by Executive Order No. 007-2017-IN) within 120 calendar days of this law coming into force.

Additionally, the Ministry of Foreign Affairs will continue to issue laissez-passers and special passports until July 1, 2026, when the issuance of official and emergency passports will formally begin.

The full text of Law No. 32457 can be accessed at the following URL: <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2443951-1>

Desayuno ejecutivo

En noviembre realizamos nuestro último desayuno ejecutivo exclusivo para clientes, en el que participaron como expositores Luis García, socio senior del área de Derecho Tributario, quien habló sobre el cierre del ejercicio fiscal 2025; Jesús Espinoza, socio senior del área de Competencia, quien comentó cómo las empresas pueden usar la eliminación de barreras burocráticas para crecer; Boris Sebastiani, socio senior del área de Derecho Laboral y Seguridad Social, quien expuso sobre el planificador de cumplimiento de obligaciones laborales para el 2026; y David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien analizó qué esperar de la economía peruana al 2026.)))

In November, we hosted our last executive breakfast exclusively for clients. The event featured several prominent speakers: Luis García, Senior Partner in the Tax Law Area, discussed the closing of the fiscal year 2025; Jesús Espinoza, Senior Partner in the Competition Area, shared insights on how companies can leverage the elimination of bureaucratic barriers to foster growth; Boris Sebastiani, Senior Partner in the Labor Law and Social Security Area, presented on the labor compliance planner for 2026; and David Tuesta, former Minister of Economy and Finance and President of the Private Competitiveness Council, analyzed expectations for the Peruvian economy through 2026.)))



Leaders League Compliance Summit Latam

El cóctel de cierre del Leaders League Compliance Summit Latam, evento organizado por la publicación francesa Leaders League, reunió a gerentes legales y de cumplimiento de destacadas empresas peruanas y de la región. Este se llevó a cabo en el edificio corporativo donde está nuestra sede.)))

The closing cocktail of the Leaders League Compliance Summit Latam, organized by the esteemed French publication Leaders League, brought together legal and compliance managers from leading prominent Peruvian and regional companies. This event took place in the corporate building where our headquarters are located.)))

Chambers Insurance Litigation Global Practice Guide 2025

Nuestra firma contribuyó en el capítulo peruano de Chambers Insurance Litigation Global Practice Guide 2025. Esta guía internacional reúne información clave sobre las leyes y normas que rigen las disputas de seguros. Los autores del capítulo fueron Fernando Meléndez, socio principal y director del área de Litigios; Ericka Angulo, socia senior; y Víctor Medrano, asociado de la misma área.)))

Our firm contributed to the Peruvian chapter of the Chambers Insurance Litigation Global Practice Guide 2025. This international guide consolidates essential information on laws and regulations governing insurance disputes. The chapter was authored by Fernando Meléndez, Senior Partner and Head of the Litigation Practice; Ericka Angulo, Senior Partner; and Víctor Medrano, Associate within the same practice area.)))





Feria del Trabajo de la Universidad de Lima

Estudio Muñoz participó en la XXIX Feria del Trabajo de la Universidad de Lima, donde compartimos con los estudiantes nuestra propuesta de valor como firma legal. Esta actividad representó una excelente oportunidad para que los alumnos conozcan de cerca nuestra cultura y descubran las distintas áreas de especialización que ofrecemos. 》》》

Muñoz Law Firm participated in the XXIX Job Fair at the University of Lima, where we shared with students our value proposition as a law firm. This event provided an excellent opportunity for students to gain insight into our firm's culture and explore the various areas of specialization we offer. 》》》

The Legal 500

Somos una de las firmas más destacadas del mercado legal peruano por The Legal 500. ¡Felicitaciones a todos nuestros abogados ranqueados! 》》》

We are proud to be recognized as one of the top firms in the Peruvian legal market by The Legal 500. Congratulations to all our esteemed ranked lawyers for their exceptional achievements! 》》》



Webinars y eventos exclusivos

El estudio llevó a cabo diferentes webinars y eventos exclusivos para clientes, donde se abordaron temas como las modificaciones al reglamento de operadores económicos autorizados (OEA); obligaciones de los operadores de comercio exterior para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo; así como el análisis de casos sobre consumo, publicidad y datos personales. 》》》

The firm hosted several webinars and exclusive events for clients, covering a range of topics including amendments to the regulations for Authorized Economic Operators (AEO), obligations of foreign trade operators in preventing money laundering and terrorist financing, and a comprehensive analysis of cases related to consumer protection, advertising, and personal data. 》》》

Copa Interestudios de Abogados 2025

El Estudio Muñiz obtuvo, por tercera vez, el campeonato en la Copa Interestudios de Abogados 2025, habiendo ganado los 7 partidos que se jugaron. ¡Felicidades a nuestro equipo masculino de fútbol por el gran desempeño!

For the third time, Muñiz Law Firm has emerged victorious in the Interlaw Firms' Cup 2025, winning all 7 matches played. Congratulations to our men's soccer team for their outstanding performance!



Leaders League 2026

Estudio Muñiz es considerado como una de las firmas más destacadas del mercado legal peruano en Corporate / M&A, Corporate Tax, Labor & Employment, Project Finance, Restructuring & Insolvency, Venture Capital, Wealth Management, Banking & Finance, Real Estate, Tax: Litigation, por Leaders League 2026.

Muñiz Law Firm is recognized as one of the leading firms in the Peruvian legal market in Corporate/M&A, Corporate Tax, Labor & Employment, Project Finance, Restructuring & Insolvency, Venture Capital, Wealth Management, Banking & Finance, Real Estate, Tax: Litigation, as noted by Leaders League 2026.

Políticas de prevención y sanción frente al hostigamiento sexual

El Comité de Diversidad y el Comité de Practicantes del estudio organizó la charla "Políticas de prevención y sanción frente al hostigamiento sexual". Se abordaron las buenas prácticas, principales políticas, así como herramientas de prevención y atención ante situaciones de hostigamiento.

The Diversity Committee and the Internship Committee of the firm organized a talk on "Sexual Harassment Prevention and Punishment Policies." The discussion covered best practices, key policies, and effective tools for preventing and addressing harassment situations.



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú
T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑOZ

MUÑOZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chincha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca